



Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía
Opiniones sobre este artículo escribanos a:

semanariovirtual@viva.org.co

www.viva.org.co

De tierras y de guerras

José Darío Castrillón Orozco
Psicólogo

Se asombran los mentideros políticos con la recepción destemplada que tuvo el presidente Juan Manuel Santos en su visita a Antioquia. En verdad no hay motivo de extrañeza. En sana lógica la institución presidencial debería despojarse de ese halo farandulero. Convendrían formas más sobrias de hacer política: mejor debatir que aplaudir o chiflar.

Lamentablemente, no se trata que Antioquia haya adquirido mayor cultura política. Es la expresión de un grupo de empresarios regionales que muestran su distancia con el Presidente de la República. No lo vitorearon en la fiesta de los cien años del periódico El Colombiano. Tampoco lo acompañó el empresariado bananero en la marcha de Necoclí, alegando que los urabeños no les dan permiso. La prensa local, que lo ha fustigado desde el inicio de su mandato ha arreciado diatribas contra el Ejecutivo en los últimos días.

Ese desafecto viene recubierto de una envoltura regionalista, presentando al departamento como víctima de una persecución originada en Bogotá. Una fórmula recurrente para levantar los paisas por odios. Para ello se esgrimen actuaciones de los entes de control como el cuestionamiento a la construcción del túnel de oriente y la alerta del Ministerio de Obras Públicas por el aumento en los costos de las autopistas de la montaña; o la sanción que la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, impone a las Empresas Públicas de Medellín, EPM, por la suspensión de las obras de la hidroeléctrica Porce IV. Suspendida por capricho de un Alcalde con renombre de borrachín. No cuestionan que la CREG, compuesta mayoritariamente por generadores privados sancione con una multa exorbitante \$23.000 millones, al mayor competidor que tienen.

Sin embargo, la nuez del problema está en la promulgación de la ley de restitución de tierras. Desde el anuncio de su trámite, azuzado por un sector empresarial, Antioquia fue el departamento más reacio al proyecto. La prensa parroquial, compuesta por El Mundo y EL Colombiano, no ha dejado de cuestionar la ley. Se empezó por esgrimir el costo fiscal, luego lo engorroso de su aplicación. Ahora se anuncia que esta perjudica a empresarios “de buena fe” y que promueve la lucha de clases.

Ambas casas periodísticas tienen intereses en el tema: son poseedores de latifundios. La señora directora de El Colombiano, Ana Mercedes Gómez, resultó salpicada en el escándalo de Agro Ingreso Seguro, como receptora de beneficios para los más ricos, sin alegar nunca lucha de clases. El señor

Guillermo Gaviria Echeverri, director del periódico El Mundo, es conocido como dueño de media cordillera, con tierras en Urabá, Chocó, Norte de Antioquia, bajo Cauca Antioqueño, también en los montes de María. Todas zonas de conflicto con evidente presencia paramilitar.

No sólo ellos. Los emprendedores paisas que iniciaron la industrialización del país, retornaron a la senda medieval, sentando su influencia social en la posesión de la tierra. Una empresa multinacional antioqueña como Cementos Argos, monopolio en su campo, termina comprando miles de hectáreas de dudosa procedencia en los Montes de María. Se alega para ello un supuesto proyecto forestal, aunque más probable es que se trate de vulgares maniobras especulativas. No son los únicos, sólo los más emblemáticos.

Pero, estos ruidos paisas contra la ley de restitución de tierras no empezaron ahora. El primero de enero de este año, se fijó como fecha para entrar en vigencia y, justamente en los primeros días de enero, fue recibida con un paro armado por el grupo paramilitar “los urabeños”. Aunque alegaron que la Policía mató a un jefe, se trató más de una ostentación de fuerza al Gobierno del presidente Santos. Una forma de intimidación al Ejecutivo para que no devuelva la tierra robada.

¿Qué va de los urabeños a ciertos empresarios antioqueños? Las versiones libres de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, alias “Don Berna”, alias “HH”, entre otros, señalan tanto a políticos regionales como a empresarios como instigadores del terror paramilitar. En este aspecto la Fiscalía General de la Nación no ha actuado todavía.

Dos factores confluyen en la cultura paisa para articularla con la ilegalidad. En primer lugar, el amor desmedido por el dinero. Ligado a este está el segundo factor, la fascinación por el delito. Ha llegado a tal esta seducción que Pablo Escobar terminó sus días con una popularidad cercana al 70%. Sucedáneo de este capo está el paramilitarismo contemporáneo que en estas tierras tuvo su origen y desde allí se extendió al resto del país, consolidando un eje que va desde Chocó, Antioquia y Córdoba, hasta el Catatumbo.

La tenencia de la tierra ha estado en el centro de las guerras del siglo XX. En 1936, con motivo de la ley 200 que consagra la función social de la tierra, el Partido Conservador y los terratenientes iniciaron la oposición al presidente López Pumarejo. Terminaron por armar sus mayordomos y una década después se desató la violencia de los 50.

Luego, con Carlos Lleras Restrepo se tuvo otra iniciativa para hacer efectiva la reforma agraria de 1961. El famoso pacto de Chicoral de 1973, entre terratenientes y partidos tradicionales puso fin a esta iniciativa, llevando a hacer más agudo el conflicto armado que tiene como trasfondo la lucha por la tierra.

Ahora, hay una nueva iniciativa gubernamental al tema agrario. Ya no se trata de una reforma sino de revertir la contrarreforma paramilitar. Como en épocas anteriores, sectores políticos retardatarios, de tufillo feudal, liderados por Álvaro Uribe Vélez, reaccionan airados. Ya los mayordomos están armados bajo el

ropaje de Urabeños y personajes públicos de extrema derecha, en líos judiciales, se dan a la fuga declarándose en rebeldía. Y algunos empresarios, varios antioqueños, hacen eco a esta amenaza.

Está por verse si el presidente Santos, se deja intimidar ante los tambores de guerra. También está por verse a qué lado se pondrá el Ejército Nacional que tradicionalmente ha estado al lado de los terratenientes. Falta saber si la justicia hará su tarea. Sin desconocer que la postura de los Estados Unidos frente al tema es decisiva.

Edición N° 00292 – Semana del 24 de Febrero al 1° de Marzo de 2012